

Honduras se hunde

JOSÉ BLANCO

En una nuez: el pueblo hondureño ha sido víctima, históricamente, del poder absoluto de la oligarquía terrateniente apoyada por las fuerzas armadas, manejadas por visibles hilos imperialistas desde Washington.

La última desgracia hondureña es la última estación de paso de un tren que históricamente ha producido sólo pobreza y terror a la población. Sin remedio, es el turno de Obama, principalmente. Estados Unidos creó y ha entrenado, desde siempre, a un ejército gorila que ha vivido de la corrupción derivada de la “ayuda” militar “requerida”; las fuerzas armadas han sido el poder detrás de un Estado gelatinoso constituido por gelatinosas instituciones “democráticas”, al servicio del poder real de la oligarquía terrateniente, cuyo ejemplo conspicuo es el llamado grupo Facussé, sobresaliente alianza de terratenientes latifundistas que, en los primeros años de la década de los 80 del siglo XX, propuso convertir a Honduras en Estado Libre Asociado a Estados Unidos.

Obama debe decidir cortar de tajo las relaciones corruptas con las fuerzas armadas hondureñas y ayudar, junto con la comunidad internacional, al surgimiento efectivo de instituciones democráticas. Una reforma agraria verdadera debe contribuir a disolver el poder incontestable de los terratenientes. Son los pasos mínimos necesarios iniciales para poner a Honduras en una ruta de modernización y de justicia social, en la que finalmente el pueblo hondureño comience a ser protagonista de su propia vida. Estos cambios elementales, lo sé, suenan a sueño guajiro, pero sin ellos no hay nada que hacer. El poder militar hondureño no vale nada sin Washington; la oligarquía terrateniente no es nada sin los militares.

El golpe militar de Estado del 28 de junio pasado estuvo precedido por un intento de “golpe de Estado civil” del propio presidente Manuel Zelaya, quien había llegado al poder con 28 por ciento de los electores. Zelaya se tropezó torpemente con la ilegalidad al intentar una consulta no vinculante y no constitucional que, como se sabe, tenía como propósito buscar el acuerdo de los hondureños para que en los comicios de noviembre se colocara una cuarta urna para votar un referendo y cambiar la Constitución por medio de una Asamblea Constituyente. La Corte Suprema de Justicia, el Órgano Superior Electoral y el Defensor de Derechos Humanos calificaron la consulta de ilegal y el “glorioso” ejército depuso anticonstitucionalmente al presidente. Acto seguido la propia Corte Suprema y el Congreso Nacional intentaron disfrazar grotescamente el golpe militar con un manto de legalidad.

La comunidad internacional repudió el golpe, haciendo indebidamente a un lado los intentos ilegales del propio Zelaya, y ha exigido su restitución. Zelaya, viendo perdido su propósito reeleccionista, ha desandado el camino, discursivamente, y ha dicho que no buscará la reelección.

En la búsqueda de la reelección, mejor aún si indefinida, Zelaya dio varios pasos previos “progresistas” convenencieros. Creyó ver en su adhesión a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP, según su más reciente denominación), un camino para imitar el método de Hugo Chávez, para continuar en la silla presidencial. Pero dio otros pasos antes.

No se olvide que al menos entre 1963 y 1980 los militares irrumpieron numerosas veces en el Palacio de Gobierno de Tegucigalpa, para echar fuera cualquier gobierno que intentara el mínimo cambio que pudiera “soliviantar” al pueblo y lo llevara a exigir nuevas demandas de justicia social. Todo ello bajo la mirada aprobatoria de Washington. Pero con la revolución sandinista, la estrategia estadounidense cambió. Después del derrocamiento de Somoza y en un contexto de guerra de guerrillas en El Salvador, el gobierno de James Carter ordenó a la Junta Militar que gobernaba Honduras acelerar los pasos hacia un gobierno civil. Todo controlado, una asamblea constituyente llevó a cabo unas elecciones generales celebradas en noviem-



Fecha 07.07.2009	Sección Opinión	Página 17
----------------------------	---------------------------	---------------------

bre de 1981, tras lo cual se aprobó la Constitución de 1982 y fue elegido Roberto Suazo como presidente. Honduras quedó así convertida en la base de operaciones de Estados Unidos contra la revolución sandinista, a cambio de una “ayuda” para el “desarrollo”, que iba a parar a los bolsillos de los políticos corruptos.

No tengo espacio para referirme aquí a la desdicha de los sucesivos gobiernos hondureños, en un proceso de empobrecimiento producto de la estela de desastres que iba consumando el barco neoliberal que tanto daño hizo antes de comenzar a naufragar.

Zelaya confiaba en que la abolición de las leyes contra la delincuencia que derivaban de la Constitución de 1982, y que sirvieron para perseguir a los dirigentes de las luchas sociales y a todo lo que oliera a izquierda, más su adhesión al Alba-TCP, le abrirían el camino hacia la reelección. Pero logró lo impensable: conjuntar a la OEA, a la ONU, a gobiernos de todos los continentes y la propia Alba-TCP, comandada por Hugo Chávez, que condenaron a coro el golpe de Estado y que, todo indica, estrangularán los aviesos propósitos de los gorilas y sus defendidos, los terratenientes.

Roberto Micheletti, el “presidente” golpista está perdido. También lo está Zelaya en sus propósitos reeleccionistas. En tanto, Honduras, el pueblo hondureño, se hunde enfrentado a una situación social devastadora, análoga a la que vivió en octubre de 1998, cuando el huracán *Mitch* arrasó el país, llevó a la muerte a más de 5 mil personas y produjo 1.5 millones de desplazados. ■